



**NUE 188-A-2020 (RG)**

**xxxxxxx xxxxxxxx contra Ministerio de la Defensa Nacional**

**Resolución Definitiva**

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las diez horas con trece minutos del doce de agosto de dos mil veintiuno.

**Descripción del Caso**

I. El apelante xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) del **Ministerio de la Defensa Nacional (MDN)**, solicitud de acceso a la información, consistente en:

*“1: Detalle de órdenes de compra desde enero hasta el 15 de septiembre de 2020.*

*2: Copia de contratos, facturas y cualquier documento comprobatorio de los gastos que el Ministerio de Defensa realizó entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2020 consignados en su ejecución presupuestaria en el rubro adquisición de bienes y servicios, cuenta servicios generales y arrendamiento, clasificación presupuestaria atenciones oficiales.*

*3: Copia de contratos, facturas y cualquier documento comprobatorio de los gastos que el Ministerio de Defensa realizó entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2020 consignados en su ejecución presupuestaria en el rubro de adquisición de bienes y servicios, cuenta consultorías, estudios e investigaciones, clasificación presupuestaria servicios de capacitación”.*

Al respecto, señaló que el oficial de información de dicho ente obligado hizo una prevención, en fecha 29 de septiembre, respecto a los siguientes puntos:

*“a) con relación al numeral 1, proporcione el detalle de bienes o servicios del cual pretende conocer en las órdenes de compra solicitadas, b) sobre los numerales 2 y 3 de su solicitud de información, es necesario aclarar a qué documentos comprobatorios hace referencias en su solicitud, a efecto de hacer efectiva su búsqueda”.*

Dicha prevención según lo manifestado por el apelante fue subsanada el 1 de octubre de dos mil veinte, de la manera siguiente:

*“1: la (...) LACAP en su artículo 39 establece tres formas de contratación de bienes y servicios: licitación pública, libre gestión y contratación directa. El art. 79 establece que para la adquisición de bienes y servicios en los procesos de libre gestión la institución contratante deberá emitir una orden de compra. La orden de compra es un documento emitido por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (Art. 9 LACAP) que contiene fecha, razón social del proveedor y los productos o servicios requeridos. Entonces en este punto se están solicitando todas las órdenes de compra emitidas por el Ministerio de la Defensa Nacional entre enero de 2020 y el 15 de septiembre de 2020.*

2: En su ejecución presupuestaria el Ministerio de la Defensa Nacional consignó gastos tanto en la clasificación presupuestaria atenciones oficiales como en la clasificación presupuestaria servicios de capacitación, entonces se pretende tener acceso a los contratos, órdenes de compra o cualquier otro instrumento legal que ampare esos gastos consignados en la ejecución presupuestaria del Ministerio de la Defensa Nacional”.

Sin embargo, su escrito de subsanación carecía de su firma autógrafa; siendo así que el día 15 de octubre de dos mil veinte, en el auto impugnado, se resolvió: *“... Es así que a través del correo electrónico de las catorce horas con un minuto del día uno de octubre de los corrientes, el peticionario remitió documento por medio del cual pretende subsanar las prevenciones realizadas, sin embargo, en dicho documento no se plasma la firma autógrafa del señor Pérez, por tanto no puede tenerse por acreditado el requisito, de conformidad a lo dispuesto en el art. 74 de la Ley de Procedimientos Administrativos( LPA) [...] Declárese*

*inadmisible la solicitud de información presentada por el señor xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, por los motivos antes expuestos en esta resolución”.*

Ante dicha resolución, el apelante manifestó su inconformidad, respecto a la respuesta recibida, por considerar que le ocasionó un agravio al declarar inadmisile su petición, ya que, aunque la subsanación de la prevención carecía de firma autógrafa, la misma ya había sido consignada previamente en la solicitud de información, y que desde el momento de la presentación de la solicitud en lo sucesivo se hizo uso del mismo canal de comunicación personal del peticionario y no el de una persona ajena. En ese sentido, anexó como documentos probatorios: i. la solicitud de información presentada; ii. prevención realizada por oficial de información; iii. respuesta a la prevención **MDN** y la resolución de inadmisión de la solicitud presentada por el ciudadano; asimismo, solicitó se ordene por este Instituto dar trámite a su solicitud de información remitida vía electrónica a dicho ente el 23 de septiembre de dos mil veinte.

**II.** El apelante interpuso el recurso de apelación ante este Instituto conforme al art. 82 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el cual fue admitido asignado al comisionado Ricardo José Gómez Guerrero para dar trámite e impulso a este procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.

**III.** Durante la instrucción de este procedimiento, el comisionado instructor con la simple vista de la documentación que yace agregada al expediente en comento, determinó que el procedimiento quedó reducido a una cuestión de derecho, en atención a la aplicación de normas y principios establecidos en la LAIP y Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), así como los derechos que asisten al titular de datos personales, de conformidad con el art. 102 de la LAIP y el Art. 309 del Código Procesal Civil y Mercantil, por lo que, se procedió a dar por finalizada la instrucción del procedimiento a efecto de emitir la resolución correspondiente al caso.

### **Análisis del Caso**

El examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** procedencia del procedimiento reducido a una cuestión de derecho; **(II)** consideraciones sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP); **(III)** breve referencia a los requisitos formales que deben contener los escritos presentados ante la Administración Pública y su aplicación al caso concreto.

**I.** De conformidad a lo establecido en el art. 163 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), en relación con el Art. 135 Inc. 3° de la misma norma, en el auto de admisión se requirió a las partes de este procedimiento que señalaran si ofrecerían medios probatorios que no consten en el expediente administrativo a efecto de valorar la apertura a prueba del presente procedimiento. Dicho auto fue notificado el 2 de diciembre de dos mil veinte, sin que se haya recibido respuesta de las partes en tal sentido.

De igual forma, la jurisprudencia contencioso administrativa<sup>1</sup>, acompaña el criterio seguido por la administración pública, que cuando no se trata de controvertir hechos, sino de la aplicación del derecho al caso en particular, resulta aplicable lo establecido en el art. 309 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), normativa supletoria aplicable de conformidad con el art. 102 de la LAIP referido a que “...*si hubiese conformidad sobre todos los hechos y el proceso queda reducido a una cuestión de derecho, se pondrá fin a la audiencia preparatoria y se abrirá el plazo para dictar sentencia*”.

Por tanto, la Sala manifestó que la omisión de la audiencia establecida en el art. 91 de la LAIP, en asuntos de mero derecho, no produce la vulneración del debido proceso en sus manifestaciones de los derechos de audiencia, defensa, congruencia y ausencia de motivación, de dicho artículo, y el 102 de la LAIP.

En ese orden de ideas, este Instituto se ve facultado para someter el presente procedimiento de apelación, a una cuestión de mero derecho, con base a la aplicación de normas y principios de la LAIP, así como los derechos que asisten al titular de datos personales, de conformidad con el art. 102 de la LAIP y Art. 309 del CPCM.

---

<sup>1</sup> Sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, el 28 de enero de 2019, en el proceso de legalidad de referencia 408-2016.

II. El acceso a la información pública es un derecho constitucional implícito, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn) pero que, a pesar de ello, tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el art. 6 de la Cn. El derecho de acceso a la información pública comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan *interés público*. Este derecho a saber se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del estado democrático de derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.

Asimismo, el art. 2 de la LAIP establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. Es decir que, al tenor de la citada disposición, para ejercer el derecho de acceso a la información es necesario que la información exista, haya sido generada, administrada, se encuentre en poder del ente obligado al que ha sido solicitada o que exista un mandato normativo de generarla.

El art. 6 letra “c” de la LAIP establece que es **información pública** aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial. Para la entrega de la información, la LAIP ha diseñado un proceso expedito en el que los oficiales de información cumplen un rol importante al realizar gestiones encaminadas a satisfacer el derecho de toda persona a acceder a la información pública.

Ahora bien, es necesario tomar en cuenta que este derecho no es absoluto y es susceptible de restricciones condicionantes en su pleno ejercicio. No obstante, los límites de

este derecho no pueden ser arbitrarios, sino plenamente establecidos por el legislador, a efecto de prevenir que la administración pública utilice discrecionalmente argumentos encaminados a negar la información solicitada por cualquier persona.

**III.** En este apartado, se hará referencia a los requisitos que debe contener el escrito por medio del cual se pretenda el ejercicio del derecho de acceso a la información de conformidad con lo establecido en el LPA, LAIP y su Reglamento (RELAIP), con la finalidad de determinar si la resolución de inadmisibilidad emitida por el oficial de información del **MDN** fue emitida en aplicación de la normativa en referencia.

Para ese cometido, debe comenzarse señalando que, como parte de la garantía del respeto pleno al derecho de acceso a la información pública, las y los oficiales de información deben de verificar que las solicitudes de acceso a la información pública o datos personales, cumplan plenamente con los requisitos de admisibilidad establecidos en la norma positiva vigente. Tal actividad se conoce como análisis preliminar de admisibilidad, el cual debe estar matizado por la flexibilidad que debe revestir los procedimientos tramitados en sede administrativa, y tiene por propósito verificar si, con base a los arts. 66 de la LAIP, 54 del RELAIP y 71 de la LPA los escritos presentados y las peticiones planteadas cumplen con los requisitos mínimos necesarios para darles trámite.

En esa línea, el art. 66 de la LAIP regula los requisitos que deberá contener el escrito por medio del cual se ejerza el derecho de acceso a la información pública o personal, esta disposición se complementa con el art. 54 del RELAIP en donde se establece que la solicitud será admitida a trámite si cumple con lo siguiente: *“letra d. que contenga la firma autógrafa del solicitante o su huella digital, en caso no sepa, o no pueda firmar. En caso, la solicitud sea enviada por medio electrónico, se deberá enviar el formulario o escrito correspondiente de manera escaneada, donde conste que el mismo se ha firmado o puesto la huella digital”*. Por tanto, es un requisito formal indispensable para el trámite de la solicitud que el peticionario de la información plasme su firma autógrafa.

Ahora bien, cabe mencionar que las disposiciones citadas se complementan con los regulados en la LPA, en tanto, esta constituye la norma general vigente para trámites

realizados ante la administración pública. De ese modo, el art. 71 de dicho cuerpo normativo establece los requisitos que deberá contener los escritos o peticiones dirigidas a la Administración pública, entre otros, la firma del interesado o su representante, por cualquiera de los medios legalmente permitidos; así como, las demás exigencias que establezcan las leyes aplicables. Unido a ello, el art. el art. 74 de la LPA bajo el epígrafe: “*firma de escritos y mecanismos de verificación y autenticidad de la solicitud*”, establece que todo escrito del interesado deberá llevar su firma o la de su representante.

A partir de ello, es dable afirmar que tanto la solicitud de información presentada al ente obligado como los escritos subsiguientes que se envíen a la Administración Pública relacionados con dicha petición deben contener la firma autógrafa del administrado. Sobre la importancia este requisito formal, se ha sostenido: “[...]este requisito que en principio puede entenderse como eminentemente formal, tiene relación directa con la legitimación activa exigida en el proceso y además, con la comprobación de la voluntad de la parte actora de iniciar un proceso ante la Administración Pública [...]”<sup>2</sup>. La misma interpretación es aplicable para el resto de los escritos presentados a la Administración cuya finalidad sea dar continuidad a la solicitud primogénita puesto que estos constituyen una manifestación del administrado de continuar con el trámite solicitado en este caso la solicitud de la información.

En suma, con base a los argumentos antes expuestos y a los documentos que constan en el expediente del trámite de la solicitud de información realizada por **xxxxxx** **xxxxxxxx** -mismos incorporados como prueba-, es oportuno confirmar la resolución de inadmisibilidad pronunciada por el oficial de información del **MDN** el 23 de diciembre de dos mil veinte, conforme a lo dispuesto en el art. 72 de la LPA en tanto, la prevención realizada por dicho servidor público, no fue subsanada en legal forma por el apelante.

---

<sup>2</sup> Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, a las ocho horas con diez minutos del 20 de marzo de 2012, en el proceso de referencia: 36-2007. Recuperado: <https://www.jurisprudencia.gob.sv/>

Sin perjuicio de lo anterior, se hace de conocimiento del apelante que le queda a salvo su derecho de presentar nuevamente solicitud de información ante el oficial de información del **MDN** dando cumplimiento a los requisitos establecidos en los arts. 66 de la LAIP, 54 del RELAIP, 71 y 74 de la LPA.

## Decisión del Caso

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas, y con base en las disposiciones legales citadas y en los Arts. 6 y 85 de la Cn., 52 inciso 3 °, 58 letras “b”, “d” y “g”, 94 y 96 letra “d” de la LAIP, este Instituto **resuelve:**

**a) Confirmar** la resolución emitida por el oficial de información del **Ministerio de la Defensa Nacional (MDN)** el 23 de septiembre de dos mil veinte y notificada vía electrónica el 15 de octubre de ese mismo año, en los términos dispuestos en esta resolución.

**b) Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

**c) Archivar** el presente expediente una vez adquiera estado de firmeza.

**d) Publíquese esta resolución oportunamente.**

***Notifíquese.-***

-----ILEGIBLE-----AGREGORI-----GERARDOJGUERRERO-----  
PRONUNCIADA POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA  
SUSCRIBEN""""""""""RUBRICADAS""""""""""

CT/JH